

La consulta plantea si la cesión de datos de un determinado asegurado que se efectúa desde una entidad aseguradora a otra entidad con la que ésta tiene concertado un reaseguro tiene cabida en los artículos 11.2 c) y 12 de la Ley Orgánica 15/1999.

En relación con esta cuestión, es preciso tener en cuenta la doctrina sentada por esta Agencia Española de Protección de Datos, en su Resolución de 30 de marzo de 2003 (procedimiento sancionador 54/2002). En ella se indica lo siguiente:

*“Según doctrina autorizada, el reaseguro es una modalidad de seguro que cubre el riesgo que asumen los aseguradores al estipular los contratos de seguro directo con sus clientes. Su finalidad es resarcir el daño (encuadrado entre los seguros de daños y no de personas) patrimonial que experimenta el asegurador directo al producirse el evento que le obliga a indemnizar a su asegurado.*

*A diferencia del coaseguro, el reaseguro cubre las consecuencias patrimoniales que para el asegurador directo tiene el pago de una indemnización por siniestro. Además, en el reaseguro, a diferencia del coaseguro, se cede parte de un riesgo ya asumido por el asegurador a otro sin que intervenga el asegurado en la operación. Por último en el reaseguro no existe ningún vínculo entre el asegurado y el reasegurador.*

*El reaseguro aparece definido en el art. 77 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (en adelante LCS), y a pesar de la íntima relación que mantiene con el contrato de seguro, ambos contratos funcionan entre sí de modo autónomo e independiente, sin perjuicio de que el seguro directo sea presupuesto necesario para el reaseguro.*

*La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro declara que no es de aplicación al mismo lo que ordena el art. 2 respecto del carácter obligatorio de sus preceptos (art. 79 LCS) destacando la falta de cualquier relación directa entre el asegurado y reasegurador. Es, en consecuencia, un pacto interno entre aseguradora y reaseguradora por el que la segunda se obliga a indemnizar a la primera dentro de los límites del convenio, obligación que nace cuando nazca la obligación del asegurador directo frente a su asegurado y sólo cuando sea líquido y exigible el crédito del asegurado contra el asegurador, será exigible el crédito de éste contra el reasegurador. El reasegurador no tendrá ninguna intervención directa en la liquidación del siniestro de base, salvo que expresamente se pacte lo contrario, careciendo el asegurado de acción directa contra el reasegurador.”*

De lo establecido en esta resolución se desprende, en primer lugar, que el reasegurador no puede ser considerado encargado del tratamiento, a los efectos previstos en el artículo 3 g) de la Ley Orgánica 15/1999.

La Ley Orgánica define al encargado del tratamiento como “La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”. En el presente caso, la actividad del reasegurador que justificaría el tratamiento de los datos del asegurado no se efectúa “en nombre y por cuenta” del asegurador, dado que corresponderá al propio reasegurador el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su relación con el asegurado y que se encuentran vinculadas al tratamiento de los datos.

En consecuencia, la transmisión de los datos al reasegurador implicará la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, señalando el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

No obstante, esta regla quedaría exceptuada en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, que permiten la cesión sin contar con el consentimiento del afectado cuando la misma se encuentre habilitada por una norma con rango de Ley (apartado a) o “Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros” (apartado c).

No obstante, debe indicarse que incluso en caso de que la cesión se amparase en el segundo de los supuestos a los que acabamos de referirnos, la misma únicamente sería posible en caso de no incorporar datos relacionados con la salud de los afectados, toda vez que el artículo 7.3 de la Ley Orgánica restringe los supuestos de cesión de este tipo de datos a aquéllos en que el interesado hubiera dado su consentimiento expreso a la cesión o, por razones de interés público, la cesión estuviese prevista en una norma con rango de Ley.

La ya mencionada Resolución de 30 de marzo de 2003 de esta Agencia viene a analizar si la comunicación planteada tiene cabida en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, concluyendo lo siguiente:

*“Respecto de la aplicación de los art. 11.2.a) y 11.2.c), y en contra de lo alegado por las partes ahora imputadas, no existe habilitación legal que permita la cesión de los datos de los asegurados directos a la entidad reaseguradora, ni la cesión a (la reaseguradora) de los datos de la afectada responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica entre la asegurada y (la aseguradora), toda vez que (la reaseguradora) es tercera persona ajena a dicha relación con la que no existe conexión necesaria para su desarrollo”.*

En resumidas cuentas, para que resulte aplicable el artículo 11.2 c) es preciso que el mismo la cesión sea necesaria para el cumplimiento, desarrollo o control de un contrato mantenido entre el afectado y el responsable del fichero, siendo así que en el caso que nos ocupa la Ley de Contrato de Seguro viene expresamente a poner de manifiesto la absoluta independencia entre el contrato de seguro y el de reaseguro, negando al asegurado relación alguna con el reasegurador, por lo que el reaseguro no es un contrato estrictamente necesario para el desarrollo, cumplimiento o control del contrato de seguro, del que es absolutamente independencia. Por este motivo, tampoco resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.

Por este motivo, el supuesto planteado no tiene cabida en los artículos 11.2 c) y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de modo que existiendo una cesión de datos de carácter personal, será preciso contar con el consentimiento del interesado, al no haber, por otra parte, ninguna norma con rango de Ley que habilite esta cesión, siendo directamente aplicable el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999..